



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

ASUNTO	Conflicto de competencia
DEMANDANTES	María Piedad Garzón Múnera y otros
DEMANDADO	Amelia Henao de Betancur
RADICADO	05001 22 03 000 2023 00352 00

Medellín, catorce de agosto de dos mil veintitrés

Estudiadas las diligencias recibidas para efectos de decidir el conflicto de competencia generado entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí y el Juzgado 017 Civil Municipal de Medellín, pasa el despacho a pronunciarse al respecto.

ANTECEDENTES

1.1. María Piedad, Diana Lucy, Dora Patricia, León Herney, Marta Jannette y Wilson de Jesús Garzón Múnera presentaron demanda verbal de prescripción extintiva frente a Amelia Henao de Betancur, con el objetivo de que se declarara la prescripción de la obligación existente entre las partes, garantizada con la hipoteca de los bienes inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias 001-838642, 001-838643, 001-838644, 001-838645 y 001-838646.

1.2. Por reparto la demanda fue asignada al Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí, quien en auto de 30 de junio de 2023 la rechazó por falta de competencia y la remitió a los juzgados civiles municipales de Medellín. Como fundamento de esa decisión, tuvo en consideración que el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso establece una regla de competencia territorial privativa, que señala que en los eventos en que se ejercite derechos reales, será competente el juez del lugar en que los bienes estén ubicados. En este sentido, determinó que, una vez revisados los certificados de libertad y

tradición de los inmuebles referenciados anteriormente, se evidenciaba que se encontraban en Medellín.

1.3. La demanda fue repartida para el conocimiento del Juzgado 017 Civil Municipal de Medellín, quien en providencia de 18 de julio de 2023 formuló el conflicto negativo de competencia, tras aducir que el proceso que se pretende adelantar es un verbal sumario de prescripción extintiva de la obligación garantizada con hipoteca, el cual de ninguna manera es de naturaleza real, pues quienes ejercen la acción por activa son los deudores de la obligación garantizada con hipoteca y a voces del artículo 2537 del Código Civil, el examen de la prescripción se hace sobre el derecho personal o de crédito que como consecuencia, puede dar lugar a que el derecho accesorio, es decir la hipoteca, se extinga.

Sobre el particular, la juez expuso que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido que el factor de competencia, por el lugar de ubicación del inmueble gravado con hipoteca, es inaplicable para trámites verbales como el de marras, y que así lo dejó sentado en auto AC576 de 2020. Adicionalmente, precisó que la parte demandante en el escrito inicial omitió indicar expresamente en el acápite de postulación el domicilio de la demandada, sin embargo, se avizora que los promotores de la demanda anotaron que el lugar de notificación de la demanda sería en la dirección Carrera 47A No. 51-70 de Itagüí y dado que los accionantes radicarón la demanda en tal municipio, era dable concluir que el domicilio de la demandada es en dicha municipalidad, no obstante, y previo a que el juzgado de origen declarara su falta de competencia, debió requerir a la parte demandante para que adecuara la demanda en tal sentido.

CONSIDERACIONES

2.1. Los numerales 1 y 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, señalan reglas de competencia territorial.

"ARTÍCULO 28. COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas:

1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.

...

7. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante”.

2.2. Por su parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto AC2058 de 2023 precisó que el conflicto de competencia resultaba prematuro en los eventos que no era dable determinar que factor de competencia fue elegido por la parte demandante. Al respecto indicó:

"En ese orden, no aparece en la demanda manifestación expresa de los demandantes frente al fallador que debe pronunciarse sobre el asunto, ni se evidencia en los anexos que Santafé de Antioquia corresponda al lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones, ni al domicilio de sus demandados. En consecuencia, le correspondía al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santafé de Antioquia, previo a declararse incompetente y con miras a desentrañar dicho aspecto, acudir al mecanismo expedito de la inadmisión de la demanda. Ello a fin de requerir a los promotores para que esclarecieran sobre el factor de competencia escogido y, de este modo, dilucidar toda incertidumbre que sobre el asunto surgió.

En consecuencia, deviene que dicha autoridad rehusó su conocimiento del asunto de manera prematura, al no contar con los elementos de juicio suficientes que permitieran esclarecer la situación anotada. Así lo ha

aseverado esta Corporación en casos similares, frente a los cuales se ha dicho que «... el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo. (Ver recientemente en CSJ AC1943-2019 y AC1251-2022).”

CASO EN CONCRETO

De los criterios de competencia territorial consagrados en el artículo 28 del Código General del Proceso, el previsto en el numeral 1 constituye la regla general. Esto es que, en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, será competente el juez del domicilio de la parte demandada. No obstante, hay procesos con fueros privativos, como son los establecidos en el numeral 7 del artículo en cita, esto es, aquellos en que se ejercite derechos reales, empero, se debe tener en cuenta lo anotado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto AC576 de 2020, pues las demandas dirigidas a la cancelación de una garantía real, no suponen el ejercicio de un derecho real, debido a que, el legitimado en la causa por activa, es el deudor y no el acreedor hipotecario, quien es el titular del derecho real.

Bajo esos derroteros y en aras de desatar el presente asunto se debe analizar que, en primer lugar, el escrito genitor está dirigido al "*Juzgado Civil Municipal Itagüí*"; sin embargo, en el acápite de competencia no se indicó cuál era el factor que se debía tener en cuenta para asignar la competencia del proceso, a lo cual se añade que la parte demandante tampoco señaló cuál era el domicilio de la demandada, pues pese a que en el aparte de notificaciones señaló una dirección ubicada en Itagüí, esta no podía tenerse en cuenta como domicilio de la accionada, pues se sabe que el lugar para recibir notificaciones no se puede tomar como domicilio.

En ese orden, la sola presentación de la demanda en Itagüí, sin otro elemento que permita reconocer que el juez de ese lugar es competente para conocer de ella, no se puede tomar como expresión de la voluntad de los demandantes en torno a la facultad que les asiste de elegir en aquellos casos en que los fueros

de competencia concurren, ni en los anexos hay circunstancias que permitan establecer lo pertinente, como tampoco se logra determinar en ellos cuál es el domicilio de la demandada. Por consiguiente, al Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí, le correspondía, antes de declarar la incompetencia, requerir al extremo procesal demandante para que aclarara lo relacionado con el factor de competencia que escogía y en aras de desentrañar dicho aspecto, procedía acudir al mecanismo de inadmisión de demanda y de este modo, dilucidar la incertidumbre que sobre el asunto se generó.

Así las cosas, se concluye que la referida autoridad jurisdiccional rehusó el conocimiento de la demanda de forma prematura, al no contar con los elementos de juicio necesarios que permitieran definir la competencia para conocer del asunto en detrimento del principio de juez natural que hace parte del debido proceso. Por lo tanto, se ordenará la devolución del expediente al Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí para que actúe de conformidad con las consideraciones expuestas.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el despacho RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR que el conflicto de competencia planteado en este proceso es prematuro.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí, para que actúe de conformidad con las consideraciones expuestas.

TERCERO. Comuníquese esta decisión al Juzgado 017 Civil Municipal de Medellín.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada